



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, julio 26 de 2022

Radicado: 05001 31 05-010-2018-00643-01
Demandante: MARÍA NOHEMÍ VELÁSQUEZ
Demandado: COLPENSIONES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 1322 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Pretende la actora el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con el pago del retroactivo de las mesadas e intereses de mora, la que reclama con ocasión del fallecimiento del pensionado Francisco Luis Colorado. En sustento de sus súplicas expuso que convivió con el pensionado por un lapso superior a 9 años, hasta el 3 de octubre de 2010, momento del deceso de aquel, prestación negado por Colpensiones aduciendo insuficiencia en el presupuesto de convivencia.

En respuesta a la acción Colpensiones expuso que las súplicas de la activa son improcedentes en tanto no se cumple el presupuesto de convivencia que exige la Ley 797 de 2003.

En decisión de primera instancia, tras advertir que de las pruebas recaudas se demuestra que la actora y el pensionado fallecido establecieron una unión como compañeros permanentes, compartiendo un proyecto de vida, el que no se interrumpió con la decisión de fraccionar los tiempos de vivienda en la casa marital y la de la hija Mónica, en tanto ello obedeció a razones de salud del pensionado, sin suspender la vida en común.

Bajo estas premisas y hallando que la vida marital tuvo ocurrencia por espacio superior a 5 años, ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con el pago de mesadas desde el 21 de agosto de 2015 dada la prosperidad parcial de la excepción de prescripción, en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales, retroactivo pensional que ordenó pagar con indexación, y condenó en costas a la parte vencida.

Decisión que fue recurrida por ambas partes así:

La activa expuso que deben reconocerse los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 pues en su sentir la negativa de la prestación no tuvo un soporte probatorio suficiente ya que pudo ocurrir que se entrevistara vecinos que no tenían un conocimiento cierto de los hechos debatidos.

A **su turno Colpensiones** refirió que debe revocarse la decisión en tanto no se cumplió con el presupuesto de convivencia dentro de los cinco años previos al fallecimiento del causante, lo que se reflejó en la investigación realizada por el extinto ISS que halló impróspero el derecho

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 las partes no presentaron escritos.

CONSIDERACIONES

Encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que mediante resolución N° 33287 de 2008 el extinto ISS reconoció a Francisco Luis Colorado la pensión de vejez en cuantía de 1 SMLVM, efectiva a partir del 1° de diciembre de 2008 (Archivo N° 2); **2)** Que el 3 de octubre de 2010 falleció el señor Colorado, por lo que la señora María Noemí Velásquez reclamó a Colpensiones la pensión de sobrevivientes anunciándose como compañera permanente, prestación negada en resoluciones N° 21527 de 2012, GNR 207415 de 2013 y VPB 21527 de 2015 aduciendo insuficiencia en la prueba de la convivencia con el pensionado por el término establecido en la Ley

En este orden de ideas corresponde a esta corporación determinar si hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siendo necesario determinar cuál es el tiempo de convivencia que se requiere para causarla y si la actora cumple con el mismo.

Pues bien, dada la fecha de fallecimiento del pensionado Francisco Luis Colorado el **3 de octubre de 2010**, debe acudirse a la norma vigente para tal data, esto es la Ley 797 de 2003, que en su artículo 13 literal a, establecen la calidad de beneficiarios (as) del cónyuge y compañero (a) permanente, cuyo vínculo y unión haya perdurado por más de 5 años continuos y anteriores a la muerte del causante.

Sobre la hermenéutica de esta norma, existe divergencia de posiciones entre los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y la Constitucional, siendo necesario cumplir con los principios de transparencia y razón suficiente, exponiendo ambos criterios y haciendo explícitas las razones por las que se asume una de tales opciones:

La Corte Constitucional en sentencia SU 149 de 2021 reiteró la visión que respecto a la pensión de sobrevivientes ha adoptado, indicando que tal prestación ampara al grupo familiar que se ve afectado por la muerte de aquel con quien se tenía una relación de dependencia, evitando que la muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínima, es así que el acceso a la prestación en favor de un cónyuge o

compañero (a) permanente está mediada por la demostración de un tiempo de convivencia, como medida de legitimidad y justicia para que la prestación llegue a los miembros del grupo familiar tanto del afiliado como pensionado fallecido, decantando reclamaciones ilegítimas, así indicó la Corporación:

“55. Los requisitos previstos en este artículo y, particularmente, el del período de convivencia, tienen la finalidad de garantizar que la pensión de sobrevivientes sea otorgada a sus verdaderos destinatarios y así impedir que, ilegítima y artificiosamente, personas distintas a quienes conforman el grupo familiar logren el reconocimiento de la prestación pensional. En últimas, estos objetivos se resumen en la intención de proteger a la familia del causante y los intereses de sus miembros. De nuevo, es importante destacar que, en virtud del principio de igualdad, estas protecciones deben cobijar por igual a las familias de los afiliados y de los pensionados.

Decisión en que se reprocha el cambio de postura asumido por la Sala de Casación Laboral de la CJS en la providencia SL 1730 del 3 de junio de 2019, donde a juicio de la guardiana de la Constitución, se varió la posición que de antaño mantenía esta corporación como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y se introdujo un elemento que no prevé la norma y que comporta una afrenta al principio de igualdad al estimar que el requisito de la convivencia por 5 años solo aplicaba para los eventos de muerte del pensionado, no así cuando fallece un afiliado.

A juicio de la Corte Constitucional en la sentencia SL 1730 de 2019 no se cumplió con la carga argumentativa para abandonar la posición asumida, al igual que descalificó los razonamientos referentes a la reclamaciones ilegítimas en los eventos de muerte del pensionado, en tanto tal irregularidad también cobija las reclamaciones por muerte del afiliado, siendo aún más factible cuando se elimina la temporalidad mínima de convivencia, aunado a que tal visión afecta seriamente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

y hallando configurados los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, evidenciado una transgresión al postulado de igualdad, violación directa de la constitución, y desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia SL 1730 de 2019 y dispuso emitir una nueva decisión donde

expusiera el sentido original del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 esto es, la igualdad de requisitos para los eventos de pensión de sobrevivientes por muerte de pensionado y afiliado.

En contraste **la Sala de Casación Laboral de la CSJ** como se advirtió, en sentencia **SL 1730 de 2020** expuso que conforme a la redacción del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado.

Resaltó que tal interpretación busca evitar las uniones de última hora para el reconocimiento pensional y brindar protección a los integrantes del núcleo familiar del pensionado, aquellos con quienes se construyó un vínculo con vocación de permanencia, con quienes se forjó un destino común e incluso contribuyeron a la conformación de la pensión que aspiran sustituir.

Explicó que el trato diferencial no comporta una violación al derecho fundamental a la igualdad y por el contrario asigna un trato diferencial a condiciones disímiles, en tanto en el caso del pensionado, ocurrida la muerte se deja causada la prestación a sus beneficiarios, por lo que resulta legítimo que se les exija un mínimo de tiempo de convivencia, y con ello precaver fraudes al sistema pensional.

Empero esta providencia (SL 1730 de 2019) se dejó sin efectos por la sentencia SU 149 de 2021, y en razón de ello la CSJ emitió una nueva decisión, la SL 4318 de 2021 donde pese a adoptar los lineamientos de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, reiteró los argumentos para variar su posición, tal como se reflejó en el salvamento de voto.

Posición divergente que reiteró en sentencias tales como SL 5415 de 2021 y SL 5270 de 2021, donde la Corte Suprema es categórica en afirmar que la intelección adecuada del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 trae un trato disímil para la prestación reclamada por muerte de un afiliado o pensionado, ya que solo para este último evento se exige la convivencia mínima de 5 años.

De las posiciones expuesta, la mayoría de integrantes de esta sala de decisión comparte la visión que expone la Corte Constitucional, ello partiendo del propósito de la pensión de sobrevivientes como medida de reparación destinada a cubrir a la familia del fallecido, en cualquier modalidad que se alegue, ora por muerte del afiliado, ora del pensionado, bajo el entendido que en cualquiera de las opciones la conformación del vínculo familiar se acredita bajo una regla objetiva y general que es la convivencia por un mínimo de 5 años, sin excepciones, ya que por esta vía se permitiría que relaciones que no se conformaron bajo un carácter de permanencia, sin intención de constituir un hogar sean favorecidas con una prestación que no les corresponde.

Entiende esta corporación que al eliminar el requisito de convivencia para alguno de los eventos, además de generar una transgresión al postulado de igualdad, permitiría que, la simple demostración de un vínculo matrimonial o alegación de una unión conyugal con tiempo insignificantes, incluso de días, se vieran legitimadas para reclamar y acceder a las prestaciones, bajo el entendido que si el legislador no fijó un tiempo, mal haría el intérprete judicial en establecerlo, lo que abriría la puerta a múltiples reclamaciones con serias y desafortunadas consecuencias para la sostenibilidad financiera del sistema, pero además, al conceder prestaciones que no responden al sentido original de la misma.

En suma, para la mayoría de miembros de esta sala de decisión de cara al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el acceso a la pensión sobrevivientes en cualquiera de los supuestos, por muerte del afiliado (a) o pensionado (a), en favor del cónyuge o compañero (a) permanente, exige la demostración de un tiempo de convivencia de 5 años, parámetro temporal objetivo donde habrá de valorarse si se conformó una unión familiar, bajo lazos con vocación de permanencia, donde se ejercitó el apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** siendo deprecada la prestación por María Noemí Velásquez, quien se anuncia como compañera permanente, por espacio de nueve (9) años y para su acreditación se presentan los siguientes elementos:

Las resoluciones GNR 207415 de 2013 y VPB 21527 de 2015 dan cuenta de la investigación que practicó la administradora de pensiones dentro del estudio del caso, exponiendo que de la prueba testimonial recaudada se concluyó que el pensionado fallecido convivió hasta su muerte con la hija Mónica Janeth Colorado.

También se aportó una declaración ante notaría rendida por Juan Bernardo Vélez Velásquez y Joaquín Emilio Meneses, quienes expusieron que conocían a la actora por más de 29 años y por tanto daban fe de la convivencia que había sostenido por más de 9 años con Francisco Luis Colorado (archivo N° 2)

Ahora bien, dentro de este trámite fueron escuchados los testigos Mónica Janeth Colorado Oscar León Montoya Vélez y Lourdes Vélez Isaza, quienes expresaron conocer a la pareja, exponiendo que conformaron una familia, regida por la ayuda y el acompañamiento hasta el fallecimiento del señor Colorado.

Mónica Janeth Colorado, quien se identificó como hija del pensionado fallecido, expuso que su papá tras muchos años de viudez decidió iniciar una nueva relación sentimental con María Nohemí, fue así que en el año 2001 su padre dejó la casa familiar ubicada en el casco urbano de Sabaneta y se mudó con Noemí compartiendo la vivienda ubicada en Sabaneta pero en sector La Doctora - barrio San Isidro (zona rural), unión que realizó un proyecto de vida común, donde era este quien contribuía al sostenimiento del hogar en mayor medida, en tanto Noemí trabajaba en casas de familia pero por días.

Indicó que Francisco Luis un año antes de su muerte tuvo una intervención quirúrgica de corazón, por tanto luego del periodo de hospitalización se decidió que aquel permaneciera durante la semana en la casa de esta testigo y retornara los fines de semana a la casa marital en San Isidro, justificado en la facilidad de acceso al servicio médico, además que para llegar a la casa en San Isidro había que subir una colina muy pronunciada, pero ello nunca implicó la ruptura de la relación con Noemí en tanto aquella siempre estuvo al tanto y cuidado de Francisco previo a la enfermedad y mucho más durante los periodos de convalecencia, hasta su muerte.

Cuando se le indagó por la declaración rendida dentro del proceso investigativo del extinto ISS para el acceso a esta prestación aclaró que ella se refirió a lo ocurrido al momento del deceso, día en que su padre estaba en la casa de esta testigo, pero nunca negó que su padre tuviera un vínculo marital con Noemí a quien reconoce como la compañera permanente de su padre. (tiempo de la audiencia minuto 19 en adelante)

A su turno **Oscar León Montoya Vélez** vecino del sector La Doctora en Sabaneta explicó conocer a María Noemí por más de 42 años no solo por cuestiones de vecindad y amistad, pero además al ser esposo de una hermana de la actora.

Con esta precisión aclaró que departía socialmente con esta testigo y su compañero permanente Francisco a quien conocía como “Pacho”, señalando que esta pareja convivió por 9 ó 10 años, compartiendo la vivienda en el sector San Isidro, sin embargo, luego de la operación del corazón fue más conveniente que Francisco permaneciera algunos días donde la hija Mónica, ya que el acceso a la casa en San Isidro implicaba subir una colina.

Calificó la relación de la pareja como ejemplar, donde Francisco era bastante afectivo con Noemí, estos compartían socialmente como esposos, además que Pacho se ocupaba de las obligaciones del hogar, con el pago de servicios públicos y alimentación.

Misma versión que ofreció **Lourdes Vélez Isaza**, también vecina del barrio San Isidro, sector la Doctora en Sabaneta, quien refirió que durante los 9 años de convivencia de Noemí y Francisco ellos no se separaron, ni siquiera en razón a la enfermedad de Francisco, pues pese a residir temporalmente en la casa de Mónica allí también se hacía presente Noemí.

En cuanto al fallecimiento de Francisco refirió que este presentaba problemas de salud, e incluso el día que falleció estaban departiendo en el barrio San Isidro, pero al sentirse indispuesto se dirigió al hogar de Mónica, enterándose esta testigo al día siguiente del fallecimiento de Francisco.

Son estos los elementos de prueba adosados al trámite, los que analizados en conjunto, de cara a las reglas interpretativas fijadas por la Sala de Casación Laboral de la CSJ y bajo la sana crítica y libre formación del convencimiento, permite a esta corporación ratificar las conclusiones del A quo.

Se demostró que la pareja estuvo unida por más de cinco años anteriores al momento del fallecimiento; unión familiar que fue de público conocimiento entre vecinos, familiares y amigos, en la cual se practicaba el sostenimiento conjunto del hogar en tanto habitaban la casa de propiedad de Noemí, mientras que Francisco Luis se encargaba del sostenimiento económico con el pago de servicios públicos y alimentación.

Con las pruebas practicadas en el trámite, ora las pedidas por la activa, ora las decretadas de forma oficiosa por la A quo se estableció que en el núcleo familia hubo muestras de ayuda y socorro mutuo, fue así que en los momentos de enfermedad de Francisco Luis se dispusieron las medidas para asegurar su bienestar, siendo más conveniente alternar el cuidado y estadía de aquel en la casa marital (barrio San Isidro – sector la Doctora en Sabaneta) y la de Mónica Janeht, en razón a la facilidad para el acceso a servicio médico, reduciendo el tránsito por el terreno inclinado que no era recomendable para sus condiciones de salud.

Los testigos señalan al unísono que el tiempo de convivencia fue por espacio de 9 aproximadamente, al identificarlo en el año 2001 ó 2002, describiendo que entre ellos no existió relaciones sentimentales paralelas ya que la ex esposa de Francisco falleció más de 20 años atrás al inicio de la convivencia con Noemí.

Así las cosas, hay lugar al reconocimiento pensional en las mismas condiciones que veía siendo pagada al pensionado fallecido; en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 raciones por año (conforme a la resolución N° 33287 de 2008), pero con ocurrencia parcial de la prescripción extintiva donde la reclamación elevada el 21 de agosto de 2018 interrumpió

el fenómeno, por tanto, se ordena el pago de las mesadas a partir del 21 de agosto de 2015.

Calculado el retroactivo pensional desde tal data y extendido hasta el 30 de junio de 2022 asciende a **SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$77´954.398)** de los cuales se autoriza a la accionada a efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.

Año	Valor mesada	Nº mesadas	Sub total
2015	\$ 644.350	0,33	\$ 3.434.386
2016	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	7	\$ 7.000.000
TOTAL			\$ 77.954.398

A partir del 1° de julio de 2022 la accionada seguirá reconociendo la prestación en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

En cuanto a los **intereses de mora**, encuentra esta corporación que no hay lugar a imponerlos, por cuanto la negativa de la entidad estuvo sustentada en la duda legítima y razonable respecto a la acreditación de los requisitos mínimos, siendo necesario agotar un debate probatorio amplio, donde se valoraron elementos de prueba documentales y testimoniales que no fueron adosados a la petición administrativa, además del decreto de pruebas de forma oficiosa a efectos de esclarecer situaciones de confusión creadas por los testigos de la parte actora, debate probatorio que fue trascendentales para llevar al convencimiento que la señora María Noemí Velásquez es la legítima beneficiaria de la prestación. (al respecto la sentencia SL 2772 de 2021)

Así las cosas, se confirma la negativa de este gravamen al igual que la imposición subsidiaria de la indexación de las condenas para remediar los efectos nocivos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, por tanto, al retroactivo a reconocer se le aplicará la variación del IPC vigente al momento del pago efectivo.

Resta por indicar que se confirma la condena en costas fijada por el A quo, sin que se emita condena en este aspecto en segunda instancia toda vez que los argumentos de los recurrentes no fueron exitosos (artículo 365 CGP)

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL CONFIRMA** la sentencia impugnada en lo referente a la causación del derecho pensional en favor de María Noemí Velásquez, modificando el numeral segundo de la sentencia extendiendo el cálculo del retroactivo pensional causado entre el 21 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2022 que asciende a **SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$77'954.398)** de los cuales se autoriza a la accionada a efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud y que se pagarán con la debida indexación a efectos de compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

A partir del 1° de julio de 2022 la entidad accionada seguirá reconociendo la pensión de sobrevivientes en cuantía de 1 SMLMV, a razón de 14 mesadas anuales.

Costas en primera instancia como indicó el A quo. Sin costas dentro del recurso de alzada.

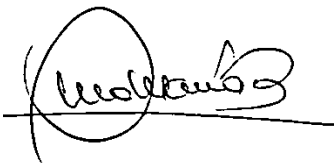
Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ
Con aclaración de voto

ACLARACION DE VOTO

Si bien me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, porque el causante era un pensionado y la demandante acredita en el proceso una convivencia mínima de 5 años antes de la muerte, resulta pertinente efectuar la aclaración del voto, en los siguientes términos:

La mayoría de integrantes de la Sala comparte la visión que expone la Corte Constitucional en la sentencia **SU 149 – 2021** *“partiendo del propósito de la pensión de sobrevivientes como medida de reparación destinada a cubrir a la familia del fallecido, bajo cualquier modalidad que se alegue, ora por muerte del afiliado, ora del pensionado, bajo el entendido que en cualquiera de las opciones la conformación del vínculo familiar se acredita bajo una regla objetiva y general que es la convivencia por un mínimo de 5 años, sin excepciones, ya que por esta vía se permitiría que relaciones que no se conformaron bajo un carácter de permanencia, sin intención de conformar un hogar sean favorecidas con una prestación que no les corresponde”*.

Así, se argumenta que, *“(…) al eliminar el requisito de convivencia para alguno de los eventos, además de generar una transgresión al postulado de igualdad, permitiría que, la simple demostración de un vínculo matrimonial o alegación de una unión conyugal con tiempo insignificantes, incluso de días, se vieran legitimadas para reclamar y acceder a las prestaciones, bajo el entendido que si el legislador no fijó un tiempo, mal haría el intérprete judicial en establecerlo, lo que abriría la puerta a múltiples reclamaciones con serias y desafortunadas consecuencias para la sostenibilidad financiera del sistema, pero además, al conceder prestaciones que no responden al sentido original de la misma”*.

No comparto los planteamientos esbozados por la mayoría de la Sala, básicamente por lo siguiente:

En primer lugar, a mi modo de ver, la interpretación efectuada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia SL 1730 del 3 de junio de

2020, reiterada en otras, como la CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL489-2021, CSJ SL362-2021, CSJ SL1905-2021, CSJ SL2222-2021 y CSJ SL5270-2021, se acompasa con la clara intención del legislador desde la expedición de la Ley 100 de 1993, al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de **afiliados** al sistema no pensionados, y la de **pensionados**, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, "*convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes*", por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.

A mi juicio, la distinción efectuada por el legislador en el **artículo 47 de la Ley 100** y posteriormente en el **literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003** comporta una legítima finalidad, se trata de una diferenciación que en manera alguna surge discriminatoria a la luz de lo dispuesto en el **artículo 13** de la Constitución Política, porque la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales.

En este caso, el elemento diferenciador lo constituye la **condición en la que se encuentra el causante de la prestación**, aspecto que fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia **C1094 de 2003**¹ y en reiteradas sentencias de tutela referidas a casos de pensión de sobrevivientes en los que fallece un pensionado²; oportunidades en las que, acudiendo a los antecedentes de la Ley 797 de 2003 publicados en la Gaceta Judicial 350 de 2002 Página 16, expuso la legitimidad de la exigencia de 5 años continuos al momento de la muerte **del pensionado** que con un derecho consolidado, deja causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte. En efecto, es en esta circunstancia que adquiere relevancia la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia para evitar fraudes al sistema pensional, proteger el núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención

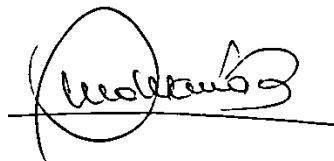
¹ Oportunidad en la que retomó los planteamientos esbozados en la sentencia **C 1176 de 2001** en la que declaró inexecutable la expresión "por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y", contenida en el literal a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,

² **T 813 de 2013, T 018 de 2014 y T 538 de 2014**

injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto.

Así, la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 referida a que se trata de una exigencia solo a los casos en que quién fallece es un pensionado, no solo proviene de la **claridad del texto** y de la **finalidad del legislador al momento de consagrarla**, sino de los planteamientos efectuados al momento de analizarse la constitucionalidad de la norma en la sentencia C 1094 -2003, los que se varían con la regla jurisprudencial definida en la sentencia **SU-141-2021**, al extender la exigencia a los eventos en que quien fallece es un afiliado, apoyándose en sentencias C-336-2014 y C-1176-2001, que en verdad, no constituyen el precedente específicamente aplicable, tal como se expone en las sentencias **SL 4318-2021 y SL 5270-2021**

Es en este contexto, que ante la actual diversidad de criterios que se presenta entre las Altas Cortes, al coincidir con la postura interpretativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia **SL 1730-2020**, y en coherencia con la postura que he dejado vertida sobre este problema jurídico, bien como ponente o en aclaraciones y salvamentos de voto según fuera el caso; efectúo esta aclaración cumpliendo así con la carga argumentativa y de transparencia para plantear de manera respetuosa el disenso frente al nuevo entendimiento que introduce la Corte Constitucional en la sentencia **SU-141-2021**.



ANA MARIA ZAPATA PEREZ
Magistrada



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-010-2018-00643-01
Demandante: MARÍA NOHEMÍ VELÁSQUEZ
Demandado: COLPENSIONES
Decisión: CONFIRMA y ADICIONA – CON ACLARACIÓN DE VOTO

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 27 de julio 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO